

Juan Agulló

## Genealogía de la crisis y problemática del cambio en Venezuela

Durante decenios Venezuela contribuyó a engranar la maquinaria capitalista mundial siendo objeto, al mismo tiempo, de una dependencia neocolonial y escenario de una sutil segregación social. Ello impidió que el Estado moderno fuera concebido como un espacio de mediación orientado a la institucionalización de consensos políticos y a la reducción de desigualdades sociales. Más bien al contrario: desde un principio, fue pensado como un enorme engranaje utilizado para repartir la renta petrolera.

De esa característica fundacional deriva la primera rémora estructural del moderno sistema político venezolano: el bienestar siempre estuvo ligado a las fluctuaciones financieras de un recurso natural de elevado valor agregado pero no renovable. La organización administrativa (e incluso las políticas públicas) fueron, por ello, más consecuencia de una bonanza económica puntual que producto de una estrategia de desarrollo planificada. En realidad lo que se hizo fue copiar recetas convertidas en sustentables gracias a los petrodólares. Como consecuencia de ello, Venezuela fue más invertida que transformada: apenas hubo análisis de coyuntura y mucho menos, planificación estratégica. La gestión de lo cotidiano se articuló a partir de fenómenos como la corrupción y —a medida que fueron descendiendo los rendimientos petroleros— de brutales formas de represión. Entre 1960 y 1998 salió de Venezuela el equivalente a 15 Planes Marshall. Las muertes violentas, mientras tanto, fueron equiparables a las de un país en guerra civil.

El problema de la gobernabilidad comenzó a fraguarse a partir del momento en el que los precios internacionales del crudo descendieron drásticamente —a principios de la década de 1980— y el Estado demostró sus limitaciones a la hora de seguir drenando recursos —en forma de políticas públicas— hacia las capas más desfavorecidas de la población. Capas que, como sea —durante los dos decenios precedentes— habían logrado incorporarse a ciertas dinámicas y sobre todo, valores de consumo<sup>1</sup>: un fenómeno relativamente singular en América Latina.

Un fenómeno relativamente singular que, devenido en problema, conllevó planes de ajuste estructural que incluyeron estrategias focalizadas —residuales— de intervención social. Los unos liquidaron los fundamentos rentistas del Estado mientras que los otros pusieron en serio peligro los viejos mecanismos clientelistas de control social. A partir de ahí fueron sentados los cimientos de un creciente malestar. También, los de una espiral de endeudamiento que —pese a perseguir la supervivencia del sistema— no hizo sino acelerar su derrumbe.

Socialmente, coincidieron dos fenómenos preocupantes: 1) la creciente frustración de los sectores populares y de las clases medias ante su pérdida de peso político y poder adquisitivo y 2) la insuficiencia de servicios públicos e infraestructuras capaces de mitigar el deterioro social. Antaño se habían construido carreteras, puentes e incluso aeropuertos pero faltaban escuelas, hospitales y sobre todo, viviendas dignas. Ello agravó los términos de una segregación social en la que maceró una frustración, cada vez más, politizada.

<sup>1</sup> Véase Coronil, Fernando (1997): *The Magical State: nature, money and modernity in Venezuela*. Chicago: CUP.

La acción colectiva enfrentó, sin embargo, serias dificultades en términos de canalización institucional. La estructura partidista bipolar le restó agilidad a un sistema diseñado –ante todo– para evitar la incorporación de elementos “extraños” (fundamentalmente, comunistas). En realidad, jamás se había pensado en mecanismos que garantizaran formas de representación social ajustadas a cada coyuntura. La progresión de la abstención electoral demuestra hasta qué punto la identificación sociopolítica con el sistema llegó a decrecer. Ni tan siquiera fenómenos políticos como el MAS o *La Causa R* fueron verdaderamente proporcionales al descontento social existente en el país. Apenas constituyeron la punta del iceberg de un sentimiento colectivo traducido en unas formas populares de organización que –desde mediados de los ochenta– comenzaron a entrar en colisión con la estructura clientelar del Estado. Ya no se trataba –como durante los años 1960-1970– de guerrillas más o menos organizadas, sino de la construcción de una estructura civil paralela a la oficial.

En este contexto las revueltas populares jugaron un papel fundamental como dinamizadoras de una anárquica y heterogénea amalgama de movimientos sociales. En ocasiones los motines fueron prueba de organización y en otras el origen de la misma. Su sentido sociopolítico trascendió los motivos puntuales por los que se produjeron. Se trató de fenómenos bastante parecidos a los que tuvieron lugar en algunos países del entorno: Venezuela llegó a preanunciar escenarios políticos y sociales, por entonces, impensables en otras latitudes.

El papel sociopolítico representado por las clases medias a lo largo de todo este periodo es similar al que jugaron sus coetáneas de algunos grandes países de América Latina. Expuestas a la presión de

los sectores populares y al deterioro de las viejas estructuras clientelares, comenzaron a perder peso político y poder adquisitivo. La incertidumbre hizo de ellas clases muy maleables, sobre todo después de que “los cerros bajarán a la ciudad”, franqueando una de las fronteras simbólicas más sagradas del imaginario sociopolítico venezolano. No por casualidad, a partir de 1989-1992, la marginalidad pasó a un primer plano. Pero para cada quién desde su perspectiva, claro. Para los sectores más acomodados, por ejemplo, frenar el deterioro del sistema equivalía a salvaguardar una maraña de intereses y privilegios de carácter rentista. Democracia no era sinónimo, pues, más que de rentas de capital y de paz social. Por eso la mayor preocupación del grupo dirigente radicó en administrar la exclusión y no en promover una estrategia de superación estructural de la misma. En un contexto tan crítico, el intento de golpe de Estado de 1992 demostró la incapacidad estructural del sistema para promover la gobernabilidad. Los rígidos instrumentos institucionales del pasado se demostraron, en efecto, incapaces de promover una redefinición más o menos consensuada del orden establecido<sup>2</sup>. El elevado grado de dependencia externa contribuyó, además, a limitar adicionalmente el margen de maniobra de los actores clásicos del sistema: incluso el de cierta izquierda en vías de institucionalización.

Imposible, pues, partir de los principios fundacionales de la IV República. Desde entonces la población se había multiplicado por tres y ya casi nadie se sentía identificado con un aparato institucional al que los sectores populares y un impor-

<sup>2</sup> Hillman, Richard S./Cardozo, Elza (1997): *De una a otra gobernabilidad: el desbordamiento de la democracia en Venezuela*. Caracas: Tropykos

tante segmento de las clases medias consideraban culpable del incremento exponencial de la pobreza en los últimos veinte años (un 83% entre 1976 y 1996). Socialmente, además, el monetarismo ortodoxo estaba siendo, cada vez más, asociado a otra forma de intervención política clásica: la represión. La desesperación estaba llegando a tal punto que los sectores más golpeados por la crisis empezaron a apostarle casi a cualquier forma de disidencia. Por eso las revueltas continuaron proliferando en la misma medida en la que comenzaron a ser apoyadas las candidaturas electorales disidentes. En este sentido, las elecciones presidenciales de 1993 marcaron un auténtico hito: por primera vez en 35 años la abstención fue parecida a un voto ganado, además, por los partidos no tradicionales. Coincidencia o no, precisamente esos fueron los años en los que en las calles de las grandes ciudades comenzaron a llenarse de vendedores ambulantes. La economía informal –diríase que paralela– se disparó frente al colapso de la formal: no sólo como receptora de mano de obra desempleada, sino como asignadora de recursos, incluido el crédito a pequeña escala. Una verdadera sociedad alternativa comenzó así a quedar delineada como consecuencia de la incapacidad de los sistemas político y económico oficiales para integrar. Es algo que ocurrió a casi todos los niveles. A la Iglesia Católica, por ejemplo, le fue imposible asumir la enorme deuda social de la que se desentendió el Estado. Fue un momento caracterizado por una inusitada revitalización del *Cristianismo de Liberación* pero también por la proliferación de multitud de sectas evangélicas, hasta entonces, prácticamente ajenas a la realidad venezolana. Con todo, no bastó: las redes informales tejidas en los barrios y pueblos del país con finalidades ajenas a la intervención social, reorientaron su actividad.

Poco a poco cada fracaso, rendición o abdicación institucional fue cubierto por la sociedad civil. Comenzó así a dar la sensación de que la forja de una nueva sociedad era un hecho. La participación constituía su rasgo más distinguible. A partir de ella y ante la ausencia de instancias más o menos formales de mediación comenzaron a ser socializados malestares presentes pero también, perspectivas de futuro. La solidaridad fue el fermento de una politización muy poco “telenovelesca”: todo dignidad, nada de glamour. La Venezuela invisible maceraba. Las clases acomodadas y los extranjeros, sin embargo, se enteraban del deterioro socioeconómico, a lo sumo, a través de cifras. No había imágenes más allá de unos cuantos *ranchitos* incorporados a la impersonalidad de los paisajes urbanos. Más que nunca en el país existía un verdadero *apartheid* informal. Un Estado dentro del Estado que gestionaba la exclusión y el deterioro ejerciendo intermediaciones entre actores contrapuestos.

Un embrión de Estado, políticamente más eficaz y socialmente más respetado que el Estado formal. Un aparato invisible que fundamentaba su agilidad en su propia naturaleza: es decir, en la falta de institucionalización de cargos, procesos y funciones; en la adaptabilidad a cada circunstancia puntual. Se trataba, en suma, de una *práctica democrática* considerada legítima por su proceder participativo pero, sobre todo, por su contraposición creciente a los aparatos del Estado teóricamente reconocido como democrático.

### Chávez en contexto

Una nueva hegemonía se encontraba, pues, en pleno proceso de construcción a mediados de los noventa en Venezuela. Faltaba, sin embargo, un elemento capaz

de cohesionar los anhelos de una sociedad emergente: bienestar, transparencia, seguridad (pública y social) y apuesta por la producción nacional. Durante algunos años pareció que *La Causa R* podía convertirse en el catalizador necesario de una praxis democrática no institucionalizada. Las esperanzas, sin embargo, quedaron truncadas tras la implosión del partido, en 1997. Antes –en 1992– Hugo Chávez ya había alterado la estructura orgánica del movimiento popular. Su intento de golpe de Estado y su posterior asunción de responsabilidades supusieron el complemento simbólico ideal al *Caracazo*. Más allá de anécdotas, el mensaje fue sencillo: la sociedad debía prepararse para asumir la única de las responsabilidades que hasta ese momento no le había sido “transferida” por un Estado en *deconstrucción*: la política. Un sinfín de grupúsculos constituyeron entonces el producto de un deseo latente de transformación.

Cinco años más tarde el ya ex militar Chávez volvió a ejercer una influencia decisiva en la evolución del movimiento popular. Antes de colocar a la sociedad venezolana ante el dilema de una elección maniquea hizo lo mismo con la izquierda tradicional. El guión se repitió posteriormente casi en cada ocasión delicada: Chávez politizó primero el malestar para presentarse después como la única solución viable. En un país de institucionalización débil y tradición católica como Venezuela, esa combinación de carisma y milenarismo funcionó. El ex teniente coronel se convirtió así en catalizador de frustraciones y cohesionador de esperanzas. No en vano logró vehicular sentimientos absolutamente contrapuestos: desde los deseos de transformación de los sectores populares hasta las aspiraciones bonapartistas de parte de las clases medias. Los índices de aceptación del proyecto *bolivariano* fueron tan amplios como el derrumbe del

“viejo orden”. En 1998, la circunstancia notable no fue el 56,2% de votos obtenido por Chávez, sino el colapso de los partidos tradicionales. Otro elemento significativo: aunque el descontento existente en Venezuela era mayúsculo desde finales de la década de los ochenta, nadie hubiera esperado una situación como la que se delineó entre 1998 y 2000. En apenas dos años la vieja estructura clientelista quedó reducida al control de seis Estados y a un puñado de deslavazados enclaves de poder fáctico unificados por su carácter rentista. Irrefutable: la degradación socioeconómica logró lo que no habían conseguido decenios de violencia política. La confirmación se dio en 2004.

La Revolución Bolivariana constituye, en efecto, un peculiar fenómeno tanto en términos de la acción que vehicula, como de la reacción que genera. Su carácter democrático se encuentra fuera de toda duda. No es la única circunstancia que, sin embargo, caracteriza al proceso. Los residuos de corporativismo a los que se enfrentó el *chavismo* determinaron la peculiar marcha de un proyecto articulado a partir de unos principios muy generales adaptados con una agilidad política impresionante a cada circunstancia puntual.

La oposición –he aquí otro quid– ni fue ni es ni será tan homogénea como suele ser presentada. Se puede decir que está compuesta por dos grandes polos: uno de tradición clientelista y el otro de tipo rentista. El primero de ellos está formado por la vieja burocracia estatal, regional y sindical mientras que el segundo lo conforman las cúpulas tecnócrata, empresarial, eclesial y en menor medida, militar. Durante decenios los unos tuvieron una relación más colectiva que los otros con el poder político tradicional.

Una vez hundidos los viejos partidos políticos ambos polos se quedaron sin el lubricante que hasta entonces les había

hecho funcionar e incluso competir entre sí. Se impuso así una colaboración orientada a la supervivencia. Entre 1998 y 2000 el liderazgo opositor fue ejercido por el sector clientelista a partir de la única base efectiva de poder que le quedaba: la regional. Tras la aprobación de la Constitución de 1999 se produjo un relevo en la dirección opositora, poco a poco asumida por su componente rentista. En 2000 los venezolanos renovaron sus cargos públicos complicando la posibilidad de una reproducción política del viejo clientelismo. La agonía, pese a todo, no fue sencilla: la nueva dirigencia opositora, sintiendo amenazados sus intereses rentísticos tradicionales, optó por minar la gobernabilidad del país casi a cualquier precio. Entre 2002 y 2004 utilizó para ello a los viejos enclaves clientelistas de la administración, a los que cooptó aprovechando la inacción política del gobierno en dicho terreno. Dicha estrategia contó con la connivencia de grupos dirigentes y empresariales multinacionales con intereses en Venezuela. Es un guión que, desde entonces, no ha dejado de repetirse: la degradación de las condiciones de vida ha sido irresponsablemente provocada por los poderes fácticos y a la vez, demagógicamente explotada por sus medios de comunicación. La abrupta irrupción de esta forma de clientelismo “privatizado” estuvo a punto de costarle al país una guerra civil en diversas ocasiones.

En 2002, por ejemplo, la situación no llegó a desbordarse gracias a la *intervención estabilizadora* del propio Chávez. El Gobierno no logró evitar, sin embargo, que la situación socioeconómica del país –ligeramente reconducida desde 1999– se degradara rápidamente. Todo ello, añadido a la pesada rémora estructural heredada y a las deficiencias administrativas y comunicacionales propias, generaron –sobre todo en el exterior– una irreal sen-

sación de impopularidad presidencial, prolongada hasta el referéndum de 2004. No es casual: a pesar de su hegemonía sociopolítica, el poder del *chavismo* siempre ha estado lejos de ser absoluto y la gobernabilidad del país jamás ha sido un hecho. La política comunicacional *chavista* se ha demostrado, además, extremadamente ineficaz. Todo ello ha incidido en una percepción exterior del *proceso* que –hasta hace muy poco– ha solido confundir (la mayoría de las veces, intencionalmente) polarización con equilibrio o peor aún, con mayoría opositora y por ende con una tiranía inexistente.

A pesar de todo, al día de hoy, la hegemonía *chavista* sigue sin traducirse en un conjunto de políticas públicas transformadoras pero, sobre todo, más o menos sostenibles. Todo ello, como sea, no tiene tanto que ver con una diagnosis –e incluso con una planificación– que más o menos existen, como con una ineficacia administrativa y un déficit de institucionalización relacionados con la batalla política en curso. Fidelidades internas y clientelismo “privatizado” siguen amenazando –aun después del referéndum– la gobernabilidad del país. Ello permite constatar los efectos políticos de la *deconstrucción* del clientelismo tradicional y su posterior redefinición a partir de una especie de privatización, por supuesto, informal. El resultado ha sido una *crisis orgánica* en la que, nadie, tiene capacidad política para imponerse al adversario. Ese es el motivo de fondo por el que el país vive instalado en una paradoja: ingobernabilidad como producto de la contraposición de dos propuestas de gobernabilidad incapaces de redefinir la estructura del Estado en términos consensuales.

A medio plazo, la resolución de dicho pulso se seguirá viendo condicionada por elementos que ejercen más de lastre que de lanzadera: torpedeo político en el caso

de la oposición e ineficacia administrativa en el del gobierno. Pero mientras que eso ocurre la sociedad venezolana continúa evolucionando en virtud de una lógica propia, independiente. Para muestra, dos botones: la abstención electoral continúa creciendo (durante el referéndum rondó ¡el 40% de los electores!) al tiempo que la economía informal ocupa ya a más ciudadanos que la formal. En efecto, da la impresión de que las dificultades de institucionalización de la praxis democrática popular están contribuyendo a su revitalización social al margen del sistema. La efervescencia política que vive el país así parece confirmarlo. No siempre existe, de hecho, una relación subordinada de los grupos ciudadanos con uno de los dos polos enfrentados en las instituciones: la mayoría se posiciona, es cierto, pero no se somete. De ahí las dificultades a la hora de detectar canales de interme-

diación capaces de redefinir la gobernabilidad.

Por el momento la participación, la producción o la negociación siguen teniendo lugar al margen de las instituciones. Es en detalles donde se percibe que lo que la resistencia a la democratización está liberando es la creatividad contenida –y reprimida– en la exclusión. El *deseo constituyente* resulta manifiesto entre las masas. Precisamente por eso da la impresión de que la gobernabilidad sólo será un hecho cuando se logre institucionalizar un proyecto nacional que habrá de subordinar la democracia ideal a la democracia realmente existente.

*Juan Agulló es doctor en Sociología por la EHESS de Paris (Francia). Actualmente realiza una estancia de investigación en el CELA de la UNAM (México) y colabora con la sección venezolana del PNUD: [esturión@nodo50.org](mailto:esturión@nodo50.org).*